



## Capítulo 10

# Las mujeres se movilizan para reorganizar la democracia

El activismo femenino en la sociedad civil constituye la fuerza principal que impulsa el cambio en la legislación a favor de la mujer, y permite apuntalar los esfuerzos de las feministas que ocupan cargos públicos. Un movimiento social de mujeres fuerte y autónomo puede aumentar en gran medida la influencia que ellas puedan tener como grupo de presión legislativa, al aportar “una base de apoyo externo así como legitimidad para contrarrestar la resistencia interna del gobierno a la promulgación y aplicación de políticas feministas”.<sup>1</sup> Los políticos comprometidos con la igualdad de género necesitan guiarse por los movimientos de mujeres locales. Su labor sería mucho más sencilla si dichos movimientos de mujeres estuvieran unidos en torno a un programa común, o si los partidos políticos tuvieran más incentivos para responder a las necesidades de la mujer. En vez de ello, el interés por las cuestiones de género es una de las muchas otras prioridades que tienen las mujeres en todo el mundo, y puede diluirse al adherirlo a códigos nacionales o culturales cuya noción de la relación entre hombres y mujeres decididamente es de desigualdad.

Por lo general se considera que la mujer tiene poca eficacia política debido a la escasa asignación de recursos de que dispone, tales como tiempo y dinero, necesarios para generar influencia social y política, y debido a que sus intereses difieren según todo tipo de divisiones sociales.<sup>2</sup> Sin embargo, las mujeres participan acertadamente en las asociaciones de la sociedad civil y en los movimientos sociales casi de cualquier región. La mundialización de las comunicaciones ha generado nuevas oportunidades, permitiendo que las mujeres experimenten con instrumentos nuevos para hacer que les rindan cuentas los agentes clave:

gobiernos, corporaciones y organismos internacionales. Las reuniones cumbre y conferencias mundiales sobre una gama amplia de temas tales como comercio, salud y derechos humanos, han permitido a la mujer establecer redes de interacción entre países y entre regiones, y han conferido legitimidad a sus propios movimientos sociales a nivel nacional e internacional, como participantes clave en los debates sobre política mundial.

Antes de examinar el papel de los movimientos de mujeres en la vida política, es necesario entender la índole de esas asociaciones. Una definición general útil es que se pueden “entender como acciones colectivas femeninas en pro de metas sociales y políticas”.<sup>3</sup> La acción colectiva puede adquirir una forma asociativa distinta, o puede simplemente abarcar una coalición difusa de organizaciones en las que se piensa de manera semejante o de grupos informales que participan en las manifestaciones. Con esta definición no se insiste en que los movimientos de mujeres necesariamente tengan como propósito central rehaer el equilibrio de las relaciones de poder desde la perspectiva de género, o que se definan a sí mismos como feministas; sencillamente tienen que estar dirigidos por mujeres y movilizarlas a ellas. El predominio de la mujer en dichos movimientos indica que éstos se apoyan en reclamaciones relacionadas con la identidad de género: ellas se han movilizado explícitamente como mujeres y porque son mujeres, haciendo valer una identidad de género femenina, distinta de otras identidades posibles.<sup>4</sup>

## MOVIMIENTOS SOCIALES DE MUJERES Y POLÍTICAS FEMINISTAS

Los movimientos de mujeres no son necesariamente feministas. La política feminista se opone específicamente al patriarcado y trata de eliminar la subordinación y discriminación que se deriva del dominio masculino.<sup>5</sup> Por lo tanto, los grupos feministas dentro de los movimientos de mujeres pueden tratar de desafiar los roles sexuales convencionales que pueden haber constituido el punto de partida primordial de su organización.<sup>6</sup> No deberían confundirse ambos tipos de movimiento; no se puede suponer que la acción colectiva femenina se dedica necesariamente a promover el avance de los derechos de la mujer y a tratar de lograr la justicia entre los sexos. En efecto, determinadas formas de activismo femenino basado en la fe, de carácter derechista o conservador, tratan de lograr lo contrario.

Fuera de las organizaciones dominadas por mujeres, hay una cantidad significativa de movilización y solidaridad femeninas. Los sindicatos, partidos políticos, organizaciones de masas promovidas por el Estado, y grupos de la sociedad civil con otros programas pueden abogar en nombre de sus miembros mujeres. Estas otras formas de movilización femenina constituyen una gran parte, probablemente la mayor, de la solidaridad femenina en el mundo.<sup>7</sup> Cuando la movilización femenina no es autónoma o independiente, puede apoyarse en “vínculos asociativos” con otros movimientos sociales. En muchas partes del mundo esto da por resultado alianzas estratégicas con grupos de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil, a veces más poderosas, cuyo programa principal se refiere a campos tales como medio ambiente, paz, liberalización del comercio, mundialización y derechos humanos.<sup>8</sup>

De manera alternativa, la movilización femenina puede adoptar la forma de “movilización dirigida”; en este caso, se halla bajo el control de otra autoridad institucional, que suelen ser el gobierno o los partidos políticos. La movilización femenina dirigida por las autoridades en nombre de intereses colectivos nacionales o religiosos puede excluir no solamente la emancipación de la mujer como una meta central; de hecho, puede funcionar para abolir los derechos de la mujer que ya se

hubieron ganado anteriormente, como en el caso de algunos movimientos sustentados en la fe.<sup>9</sup> Los líderes conservadores han solicitado activamente la participación de las mujeres en esta forma de acción colectiva a fin de demostrar la legitimidad popular de las propuestas para fortalecer las interpretaciones patriarcales de los derechos de la mujer. Un ejemplo notable de ello fue la participación de las mujeres en la revolución islámica del Irán en 1979.

## COMPROMISO DE LA MUJER CON LA DEMOCRACIA

Lo que ha sido descrito como la “tercera ola” de democratización<sup>10</sup> llegó a su cúspide en 1989-90 con la caída del socialismo de Estado en el antiguo bloque de países de Europa Oriental y con su transición hacia economías abiertas. En los Estados autoritarios restantes, ha seguido habiendo una movilización hacia la democracia durante los últimos 15 años, así como el establecimiento de democracias nuevas después de los conflictos en los Balcanes y en África. Por todo el mundo, un número significativo de países están pasando por un proceso extenso de consolidación democrática, en el cual los ordenamientos jurídicos están siendo corregidos a fin de incorporar derechos constitucionales nuevos, y la capacidad de los sistemas políticos para tolerar la oposición está siendo sometida a prueba. En América Latina, donde la ola de lucha revolucionaria y liberación política culminó antes que en cualquier otra parte, las mujeres han avanzado al máximo en la promoción de cambios constitucionales y legislativos para que se reconozca su igualdad, así como en la confirmación de esos logros en el terreno de las políticas públicas.

Se reconoce que la mujer ha jugado un papel fundamental para lograr el éxito en muchas de las lides por la democratización, especialmente cuando se han clausurado los canales convencionales de oposición política. Cuando los partidos y los sindicatos han sido prohibidos, como en Chile bajo la Presidencia de Augusto Pinochet, o cuando los miembros del liderazgo masculino de los movimientos de liberación nacional han estado en el exilio o en la cárcel, como en Sudáfrica, la

movilización de las mujeres de base ha proporcionado un espacio en el que se ha podido sostener la política de oposición. Esta contribución a la democratización no siempre ha aportado una plataforma para el consiguiente involucramiento de las mujeres en política. En Chile, por ejemplo, durante las protestas de finales del decenio de 1980, cuya base social estaba en los barrios bajos, la estructura de organización descentralizada y liderazgo difuso permitió proteger a las mujeres activistas, pero no generó mujeres en política capaces de obtener posiciones de liderazgo en los nuevos partidos democráticos.

Es posible detectar pautas de involucramiento de las mujeres en el proceso democratizador, algunas de las cuales se repiten en entornos diferentes por todo el mundo; otras pautas son específicamente regionales. En algunos casos, cuando ha habido descontento social prolongado y un movimiento de resistencia, las mujeres no sólo han estado activas en la etapa de levantamiento, sino que sus representantes han sido capaces de participar en las negociaciones sobre las nuevas constituciones. La aportación de la Coalición Nacional de Mujeres de Sudáfrica al proceso de redacción de la Constitución, a mediados del decenio de 1990, es el caso más claro de capitalización de un movimiento de mujeres en el cual se aprovechó el papel anterior de estas últimas para afirmar sus intereses en el nuevo entorno. Un proceso semejante tuvo lugar en Namibia, Etiopía, Eritrea, Timor Oriental, Filipinas y Mozambique.

### Contragolpe: La experiencia de Europa Oriental

Aun cuando los Estados autoritarios como los de la antigua Unión Soviética y Europa Oriental basaban parte de su legitimidad en su actitud incluyente hacia la mujer en el lugar de trabajo y en la vida pública, la democratización subsiguiente generó un contragolpe contrario a la participación de la mujer en política. En Europa Oriental, el papel asignado anteriormente a las mujeres en los asuntos públicos por parte de los regímenes comunistas represivos las alentó para que redujeran sus intereses feministas; en vez de ello, trataron de insistir en su papel en la esfera privada de la vida familiar como guardianas de la

privacidad e integridad de la familia. Los movimientos disidentes de los años 80 protestaban contra la ingeniería social invasiva, y fueron descritos como los portadores de una ideología “contraria a la política”.<sup>11</sup> Las mujeres no participaban en el liderazgo de esos movimientos; solamente el 20 por ciento de los signatarios de la Carta 77 eran mujeres y, aunque la mitad de los miembros del movimiento social polaco Solidaridad eran mujeres, pocas de ellas ocupaban cargos de liderazgo.<sup>12</sup>

La defunción del socialismo de Estado y la transición a la democracia generaron una marcada disminución en el número de mujeres con cargos públicos, así como el estancamiento de su participación en actividades de la sociedad civil. En muchos países de Europa Oriental, actualmente se considera que los grupos feministas son muy débiles,<sup>13</sup> y aun cuando varios de estos grupos estén activos, como en Polonia, se les ve como “una curiosidad más que como una fuerza política real”.<sup>14</sup> Algunas organizaciones de mujeres se alinean con las ideologías conservadoras, idealizando a la mujer en sus papeles maternal y doméstico, además de oponerse activamente a sus derechos reproductivos y al aborto. El Partido Demócrata Cristiano de Hungría que es el que atrae más a las mujeres votantes y tiene la proporción más alta de miembros del sexo femenino, ensalza la superioridad moral de la mujer con sus obligaciones en el seno del hogar católico tradicional.

### Paradojas: África del Norte y Oriente Medio

En algunos Estados de África del Norte y Oriente Medio, la democratización ha generado paradojas semejantes. En los países donde los regímenes militares, monopartidistas o monárquicos suprimieron las asociaciones islámicas (como en Argelia, Egipto, Jordania y Marruecos), a menudo se substituyó la democracia por programas de desarrollo social como fuente de legitimidad, y se dieron algunos pasos para realzar la condición de la mujer.<sup>15</sup> Así, la promoción de sus derechos llegó a ligarse con gobiernos impopulares. Los procesos rápidos de liberación política promovidos desde arriba han quedado incompletos y pocos titulares de regímenes anteriores han sido desbancados.

La evidente mala fe demostrada con las restricciones impuestas a la competición política efectiva ha desacreditado el proceso de reforma política.

En muchos de esos países, los únicos movimientos sociales en los que se articula una oposición coherente y creíble contra un régimen pueden ser los grupos islámicos cuya crítica se sustenta en la antipatía hacia la democracia occidental y el capitalismo consumista. El dilema de los movimientos de mujeres es profundo. En los conflictos vigentes entre Israel y Palestina y en Irak, la legitimidad de los gobiernos seculares se ha erosionado y la credibilidad de la crítica islámica se ha reforzado entre las mujeres. Los movimientos de mujeres carecen de recursos sociales y políticos para poder impugnar a los grupos islámicos poderosos y, por el contrario, interactúan estratégicamente con ellos. Para muchas personas, esto ha significado trabajar desde el interior del campo islamista, tratando de revisar las interpretaciones religiosas del papel de la mujer a fin de extender el espacio para su expresión política.<sup>16</sup>

## Democratización impuesta: el África subsahariana

En varios países del África subsahariana, el proceso de liberación política puesto en marcha en el contexto del ajuste estructural y como una condición para recibir préstamos del extranjero, se ha realizado sin entusiasmo; la participación de la mujer ha sido limitada. Los partidos gobernantes acostumbrados al poder incondicional, como en Malí, Côte d'Ivoire, Guinea, Zambia, Tanzania, Burundi y Malawi, han tratado de controlar la democratización y detener el surgimiento de una verdadera oposición. En la política tradicional del "hombre fuerte" ha habido una tendencia a confinar el involucramiento político de la mujer a actividades que fueran marginales y de apoyo sin críticas al líder nacional: cuando en el decenio de 1990 se abrieron los procesos políticos, los movimientos de mujeres estaban en condiciones endebles para poder participar.

En 1995, por ejemplo, el partido gobernante en Tanzania anunció la reanudación de una política multipartidista y llevó a la nación a las urnas por primera vez en 30 años. No hubo

posibilidad de evaluar el pasado y renegociar las reglas de la política democrática. En Malawi, a la sociedad civil sólo se le concedieron unos pocos meses para cambiar la constitución en 1994; en Zambia, el levantamiento social y el malestar violento a mediados del decenio de 1990 provocaron una precipitada elección multipartidaria en 1996, sin posibilidad alguna de realizar un cambio constitucional e institucional. En contraste, en Uganda, después de la guerra civil, una transición prolongada permitió a las mujeres hacer una aportación sustantiva al debate constitucional, aunque éste ha tenido lugar dentro del régimen de partido único establecido por la Constitución.

Al igual que en África del Norte, la tasa lenta de consolidación democrática en la mayoría de los Estados del África subsahariana es evidente por la ausencia de todo cambio significativo en la composición gubernamental o el liderazgo, aunque se destacan las excepciones alentadoras de Ghana, Benin, Senegal y Kenya. En algunos países, los partidos de oposición siguen siendo débiles y las autoridades ejecutivas, excesivamente poderosas. Esto plantea problemas serios para los movimientos de mujeres, en la medida en que se apoyan en la ayuda del Estado para desarrollar una política que sea sensible a la distinción por razón de sexo. Está resurgiendo un ciclo ya conocido: las autoridades ejecutivas se legitiman a sí mismas en parte a través de su patronazgo del movimiento de mujeres, lo cual funciona en descrédito de la causa de la igualdad de género. En otros países, tales como Angola, Burundi, Congo, Somalia, Sudán y Liberia, la democratización sigue siendo una prospectiva distante en la medida en que la sociedad civil trata de detener o recuperarse del terror y la guerra. Zimbabwe es un ejemplo de país donde el proceso democrático ha perdido terreno ante la violenta represión estatal. En la carrera para las elecciones del 2000, la movilización política de las mujeres en todo el espectro político quedó controlada por la intimidación generalizada.

## La campaña de las mujeres por el cambio constitucional

El cambio constitucional ha sido un objetivo central de la participación reciente de la mujer en la democratización. En el decenio de 1990, por todo el mundo, las organizaciones de mujeres mostraron los límites de los derechos básicos civiles y políticos cuando excluyen del escrutinio democrático la esfera “privada” del matrimonio y la vida familiar. La revisión constitucional ha permitido a las mujeres en política identificar las graves diferencias que hay entre los derechos ciudadanos básicos de la mujer y los del hombre, y atender al problema del sesgo de género del derecho consuetudinario y religioso, en la jurisdicción de los asuntos de familia. Se han instituido también disposiciones tales como el sistema de cuotas o el de cargos reservados en los gobiernos nacional y subnacional, para hacer que en el futuro el acceso de la mujer a los cargos públicos sea más fácil.<sup>17</sup>

La importancia de adoptar una posición firme sobre los derechos de la mujer en los procesos de revisión constitucional ha reactivado la unión de los movimientos de mujeres, aunque sólo sea temporalmente, en torno a dichos procesos de cambio constitucional. En Uganda, la participación de la mujer en la Asamblea Constituyente generó las bases de una reunión electoral efectiva de dicha Asamblea, así como en la primera Asamblea Nacional para la cual muchas de las mujeres fueron elegidas. La participación en política ha permitido a las mujeres que ocupan algún cargo público afinar sus facultades estratégicas, a la vez que ha ampliado la comprensión y las habilidades políticas de los grupos de mujeres que han tratado de apoyar y cabildear a favor de las que tienen puestos públicos. El compromiso constitucional significa un nuevo frente en la lucha por la rendición pública de cuentas en cuanto a la igualdad de género: al insistir en su participación en esa lucha para que se apliquen las normas de membresía a nivel nacional y se fijen las reglas de acceso al poder y ejercicio del mismo, las mujeres están sugiriendo que no se quedarán atadas por sistemas políticos en los cuales ellas no han tenido ni voz ni representación alguna.

## Mobilización para ganar elecciones: La lucha por el 50 por ciento

En el período posterior a la transición, muchos países han sido testigos de una paralización de los movimientos de mujeres. En América Latina y Sudáfrica, en particular, algunas activistas feministas prominentes en la lucha a favor de la democracia han sido absorbidas por el gobierno. En muchos entornos, la unidad suscitada por la oposición al autoritarismo se ha disuelto y han resurgido las diferencias que venían de largo tiempo atrás. Pero no obstante cuán profundamente divergentes sean las posiciones de las mujeres en relación con muchos asuntos, ha habido una base de común acuerdo sobre la cual converge la mayoría: la demanda de paridad de género en cargos públicos. Desde finales del decenio de 1990, las campañas de la sociedad civil en pro de una representación igualitaria de hombres u mujeres ha adquirido ímpetu, auxiliada por la campaña internacional “50/50” de la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO, en sus siglas en inglés). Mujeres pertenecientes a todo el espectro político pueden estar de acuerdo en protestar por el escaso número de las que participan en política y la deficiente atención a sus intereses por parte de los partidos políticos.

La presencia de un número cada vez mayor de mujeres en cargos oficiales funciona como un catalizador para pugnar porque haya una cantidad más grande todavía. En Uganda, por ejemplo, el aumento en el número de mujeres en política ha impulsado “un nuevo tipo de auto-organización política de las mujeres de dicho país”:<sup>18</sup> obtener acceso a la política se ha convertido en un motivo de interés común para diversos grupos de mujeres. En Namibia, un movimiento de mujeres étnicamente diverso y hasta ahora dividido se unió en torno a un mismo propósito: elegir mujeres para que ocupen cargos oficiales. Establecida en 1999, la Red del Manifiesto de la Mujer de Namibia, una coalición de grupos que apoyan el manifiesto para elección de la mujer, tenía como una de sus metas principales el logro de una cuota del 50 por ciento de mujeres en las listas de candidatos del partido; estas listas iban a ser estructuradas bajo el modelo “cebra”, en el que se alternan mujeres y hombres. La campaña 50/50 suscitó una movilización a nivel del país en general a un

grado sin precedente en Namibia, hasta el punto de que “la política se está convirtiendo en el punto central en torno al cual está surgiendo un consenso feminista nuevo [en África]”, y donde “el aspecto pragmático de la representación política femenina en el decenio de 1990 está dando forma al emergente movimiento de mujeres africanas”.<sup>19</sup>

En América Latina ha habido una evolución semejante. Desde los años 90, la meta de lograr una representación creciente de la mujer en los órganos políticos formales se ha convertido en un tema unificador de los grupos de mujeres de la región. Muchos países han promulgado leyes estableciendo cuotas de mujeres en las listas de los partidos, y muchos de estos últimos tratan todavía de evadir estos mandatos. En tales circunstancias, la vigilancia para que el partido cumpla con dicha disposición se ha convertido en un interés común de los grupos de mujeres de todo el espectro político: las mujeres de los partidos conservadores están tan interesadas en los escaños políticos como las de los partidos de izquierda.

Sin embargo, las propuestas de medidas de acción afirmativa no siempre unifican a las mujeres. En la India, una enmienda constitucional para reservar a las mujeres el 33 por ciento de los escaños del Parlamento ha sido demorada desde 1996. Aunque muchas asociaciones femeninas apoyan la enmienda, esto no ha sido motivo de unificación para las mujeres en el clima político actual. Las divisiones son profundas y penetran hasta el corazón de la política de la India. Gracias a la expansión reciente de la democracia en este país han surgido muchos partidos étnicos pequeños y basados en las castas, a nivel de los estados, cuyo papel en la formación exitosa de coaliciones en el centro es a menudo decisivo.<sup>20</sup> El surgimiento de estos partidos refleja decenios de acción afirmativa para apoyar a las tribus y castas socialmente en desventaja, mediante lugares reservados para sus miembros en escuelas, universidades y empleos en el sector público. Algunos de estos partidos se oponen a la enmienda para fijar en el 33 por ciento la proporción de mujeres en el Parlamento, por considerar que es una forma de reafirmar el dominio de la casta superior sobre las instituciones políticas nacionales, dominio que ya se ha erosionado significativamente. El decreto de reserva de escaños no incluye estipulaciones para establecer “cuotas dentro de las cuotas”, a fin de asegurarse de que las

mujeres que logren llegar al Parlamento no sean sólo las instruidas, ricas y de casta superior, pues es más probable que éstas tengan los vínculos y recursos necesarios para participar en la competición por los cargos.<sup>21</sup>

## REACCIÓN DE LAS MUJERES ANTE LOS MOVIMIENTOS ÉTNICOS Y LOS MOVIMIENTOS BASADOS EN LA FE

No obstante que en muchos países la liberación política ha permitido que florezcan los movimientos laicos de mujeres, en algunos otros la democratización se ha demorado o se ha atorado por la crisis económica o política. Cuando el Estado, en su apariencia moderna y laica, fracasa al no poder garantizar la seguridad física o mejorar el suministro de servicios, su imagen se deteriora. En algunos países, el descrédito de la modernidad como solución a los problemas sociales ha estimulado el crecimiento de movimientos sociales conservadores de carácter étnico y religioso, a menudo a pesar de la represión oficial. Las relaciones de género son asuntos de importancia fundamental para muchos de estos grupos, particularmente cuando se relaciona la “liberación de la mujer” con una modernización fallida o represiva.

En un número cada vez más grande de países, estos grupos se han convertido en actores políticos importantes, especialmente cuando son eficaces para movilizar a las poblaciones socialmente marginadas. Los grupos islámicos de África del Norte y de países de Oriente Medio tales como Túnez, Marruecos, Egipto y Jordania; en países de Asia Meridional y del Sudeste de Asia, como Bangladesh, Malasia e Indonesia; y en países de África Occidental, como Senegal y Nigeria, puede ser que no obtengan muchos escaños en el Parlamento. Sin embargo, esos grupos islámicos ejercen una gran influencia política como intermediarios y en la selección de líderes de las coaliciones de gobierno. En otros países, como Filipinas o Argelia, esos grupos han sido prohibidos pero tienen una capacidad creciente para alterar el orden. Ha habido también un crecimiento notable de

los grupos cristianos, tanto conservadores como radicales, que, por ejemplo, fungen como animadores sociales de actividades de autoayuda a nivel de base en América Latina y África. Institucionalmente, la Iglesia continúa también teniendo impacto en la política de alto nivel en muchos países latinoamericanos y africanos, así como en Filipinas. En la India, los movimientos chovinistas hindúes culturales y religiosos han polarizado al electorado según el lineamiento hindú-musulmán y han contribuido al éxito electoral de los partidos con los cuales están asociados.

No hay evidencias de que las mujeres se sientan más atraídas que los hombres por los grupos conservadores sustentados en la fe o culturalmente extremistas, pero hay pruebas de que por todo el mundo estos grupos están adquiriendo fuerza. Las mujeres forman un componente no especificado pero visible tanto en la membresía como en el liderazgo. La conducta, movilidad, vestimenta y papel de la mujer en el interior de la familia son a menudo fundamentales para la reactivación cultural de la sociedad pía concebida por estos grupos; se alaba el comportamiento de las mujeres como si fuera una marca de autenticidad e integridad moral. Cuando las asociaciones religiosas conservadoras se han constituido en partidos políticos, no les han otorgado a las mujeres acceso al poder institucional ni dentro del partido ni en cargos públicos. Pero, como movimientos sociales, han exhortado a las mujeres a que se comprometan a participar en el activismo público y aun a que se vuelvan militantes de maneras tales que violan los roles sexuales tradicionales; por ejemplo, al incitar a la violencia como lo hicieron las mujeres nacionalistas hindúes en las masacres contra los musulmanes en Gujarat en 2002. Al mismo tiempo, estas mujeres articularon programas culturales y sociales en los que se propuso la restricción a sus derechos. Esta capacidad simultánea de los grupos étnicos o religiosos para movilizar a las mujeres por un lado, a la vez que socavan su propio progreso por el otro, es un asunto de suma preocupación para las feministas. En particular, el aumento del islamismo político ha hecho que muchas feministas de las sociedades musulmanas reconsideren la utilidad de un enfoque laico, que pudiera ser alienante para aquellas mujeres para quienes la religión es fundamental y que muy bien pudieran constituir una mayoría.

## Las mujeres en la movilización no liberal

Hay muchas explicaciones sobre el atractivo que tienen para las mujeres los movimientos conservadores o religiosos extremistas. Una congregación religiosa puede proporcionar un foro socialmente aceptable en el cual las mujeres pueden expresar sus preocupaciones. Muchos movimientos sociales basados en la fe o en la iglesia proporcionan una gama de servicios necesarios para las mujeres, e incluso satisfacen necesidades específicas relacionadas con la distinción por razón de sexo de manera más confiable y práctica que las disposiciones constitucionales laicas y progresistas que no se aplican. Aparentemente se les ofrecen espacios de aprobación social, seguridad sexual, certitud normativa y facultad para actuar políticamente, teniendo además la ventaja de suscitar menos objeciones por parte de los maridos que las que suscita el activismo feminista.

En sociedades conservadoras, es posible que la mujer encuentre papeles de liderazgo social disponibles para ella a través de los movimientos religiosos, especialmente en los entornos sociales donde las formas respetables de adoptar esos papeles son escasas, ya que las mujeres que se movilizan por sí solas tendrían que enfrentarse al acoso sexual. En la India, la Rashta Sevika Sangh, que es la rama femenina de la asociación militante cultural hindú llamada Rashtriya Swayam Sevak Sangh, proporciona además a las mujeres jóvenes los medios para posponer el matrimonio mientras contribuyan a la causa del nacionalismo hindú mediante el ejercicio, el trabajo social y el entrenamiento en el uso de rifles y *lathis* (bastones de madera). En Bangladesh y en el Pakistán, el Jamaat-e-Islami les da a sus reclutas un distintivo llamado *burqa* para identificarlas como miembros de Jamaat, a fin de que los activistas del partido puedan defenderlas de los ataques de otros individuos; así se favorece su movilidad espacial.

Los movimientos sociales basados en la fe tienen también recursos extensos y pueden aportar servicios sociales cuando el Estado haya fracasado. En Bangladesh, el Pakistán y otros países musulmanes, los grupos islámicos dirigen *madrassas* (escuelas coránicas) para los niños. En los países latinoamericanos, las iglesias cristianas organizan comedores comunales, escuelas y servicios básicos de salud en los barrios de ingresos bajos. La



caridad puede ser la única forma de ayuda para las mujeres que quedan fuera de las redes de seguridad de las familias y las comunidades en las sociedades en las que el Estado presta pocos servicios. En Bangladesh, cuando las esposas quedan divorciadas arbitrariamente de los maridos y carecen de propiedades y medios para asegurarse el sustento, es probable que las agrupaciones femeninas rurales del Jamaat sean su única fuente de refugio y apoyo financiero. Los grupos religiosos pueden ofrecer también servicios de vigilancia y protección cuando los sistemas de seguridad del Estado hayan fracasado.

Un aspecto fundamental de los movimientos religiosos contemporáneos que atrae muchos adeptos es su crítica al Estado, a la sociedad y a la invasión cultural relacionada con la mundialización, junto con los derechos concretos de la mujer que dichos movimientos promueven. En toda América Latina, la Iglesia Católica ha reconsiderado sus alianzas y ha tratado de apoyar las luchas de los pobres contra las élites tradicionales. En el Brasil, Chile y El Salvador, las protestas de la Iglesia contra los abusos a los derechos humanos la ha puesto en contra de los regímenes militares; en el Brasil, sus protestas llevaron a las feministas a aliarse directamente con ella en algunos asuntos. Los movimientos islámicos, hindúes y cristianos articulan críticas a la corrupción oficial y a la invasión de la decadente cultura occidental, proclamándose a sí mismos como defensores de la moralidad. Las culturas auténticas que ellos quisieran proponer promueven roles sociales complementarios para mujeres y hombres; esto puede resultar atractivo en contextos donde el cambio económico ha erosionado la capacidad de los hombres de ganarse la vida y las mujeres sufren un grave desgaste al dividir su tiempo y energías entre un empleo mal remunerado y las labores domésticas.

Al mismo tiempo que ofrecen una crítica atractiva de los regímenes políticos y de la política económica neoliberal, los movimientos religiosos aparentemente son capaces de combinar puntos de vista conservadores sobre las relaciones de género con papeles prominentes para las mujeres líderes. Algunos de dichos movimientos aun llegan a proporcionar apoyo para determinados aspectos de promoción de la autonomía y los derechos de la mujer. Uno de los rasgos más notables del nacionalismo hindú de la India es el hecho de que los oradores de

más éxito del movimiento son mujeres, algunas de ellas solteras, quienes no siguen las prescripciones conservadoras de comportamiento de la mujer. Dos de ellas, Uma Bharati y Sadhvi Rithambara, ayudaron a azuzar a la multitud para que destruyeran la mezquita de Ayodhya en diciembre de 1992. Sus grabaciones antimusulmanas incitando al pueblo a la violencia eran tan virulentas que fueron prohibidas por el Gobierno. Mujeres líderes militantes como las mencionadas, excepcionalmente viven y trabajan con gran independencia; sin embargo, defienden la subyugación de las mujeres al ámbito doméstico y la subordinación a sus maridos.<sup>22</sup> No obstante, la defensa de los intereses de un programa religioso o nacionalista supera en importancia al cumplimiento de las expectativas tradicionales, al punto de llegar a exhortar a las mujeres a que abandonen su modestia femenina, abracen la militancia e incluso asuman misiones suicidas.

## Posiciones socialmente progresistas

Muchos grupos religiosos se oponen con firmeza a la violencia contra las mujeres y a la poligamia. Pueden apoyar también los derechos de la mujer a la herencia u oponerse a su explotación sexual. Debido a que para los movimientos basados en la fe la posición social de las mujeres y su conducta moral es más importante que para los partidos laicos, algunos de dichos movimientos realizan grandes esfuerzos para involucrarlas y atender a sus necesidades. Los grupos pentecostales de las zonas de clase proletaria del Brasil han insistido de manera particular en ayudar a las mujeres a enfrentar la violencia doméstica.<sup>23</sup> En Bangladesh, donde la movilización de mujeres urbanas y rurales en torno a sus derechos y problemas de subsistencia es significativa, evidentemente Jamaat-e-Islami considera que el apoyo de la mujer es importante para sus perspectivas electorales y su legitimidad social. En su manifiesto para las elecciones de 1996, esta organización islámica prometió aumentar el empleo (segregado) de las mujeres, acabar con el pago de la dote, detener la violencia contra las mujeres y apoyar sus derechos a la herencia, aplicando para ello los preceptos islámicos sobre igualdad humana para así elaborar una imagen socialmente progresista.



En algunos países, las mujeres han tratado de hacerse cargo de este programa basado en la fe al tratar de definir una posición islámica feminista y desafiar el monopolio de los clérigos sobre la interpretación de la ley *Shari'a*. Estos esfuerzos reflejan también un interés por lograr que sea más coherente la interpretación de los derechos de la mujer; en muchos países nominalmente laicos (Egipto, Argelia y Jordania), la ley religiosa se utiliza de manera fortuita e inconsistente para anular los derechos de la mujer sancionados por la constitución. De igual manera, en el Irán, donde se aplica una interpretación dogmática del Islam por parte de un Estado teocrático autoritario para restringir los derechos de la mujer, hay pocos contextos donde las feministas puedan comprometerse legítimamente fuera de la *Shari'a*, ofreciendo interpretaciones nuevas para justificar la ampliación de esos derechos.<sup>24</sup>

La labor de los teólogos islámicos feministas ha mostrado que la *Shari'a* permite satisfacer muchas de las necesidades de la mujer en asuntos tales como matrimonio, divorcio y herencia. El Islam feminista ha tenido una repercusión cultural importante al aumentar el conocimiento que tienen las mujeres sobre sus derechos bajo la ley *Shari'a*. Sin embargo, la empresa entera no habría avanzado tanto si no hubiera sido por el hecho de que la República Islámica del Irán ha aportado un modelo de Estado teocrático contemporáneo al cual pueden aspirar los islamistas. El feminismo islámico contemporáneo es también una reacción contra la estereotipación cultural del Islam.<sup>25</sup> Por ello, tanto la factibilidad del control islámico del Estado, como el vilipendio de la fe musulmana y sus creyentes, han hecho que el Islam feminista sea una opción creíble para las mujeres que están activas en las sociedades musulmanas.

Las feministas laicas se comprometen cada vez más con las mujeres de grupos basados en la fe, reconociendo que éstas tienen en efecto un interés en la apertura política y que cuentan con un espacio para desafiar la desigualdad de género. En Malasia, por ejemplo, las mujeres musulmanas que representan los órganos islámicos promotores del bienestar social, ingresaron en el Programa de la Mujer para el Cambio (WAC, en sus siglas en inglés), grupo formado después de la debacle por la persecución que llevó a cabo el Primer Ministro Mahatir Mohamad de su Primer Ministro Adjunto Anwar Ibrahim en

1998. El WAC, con la fuerza de sus 80 organizaciones no gubernamentales (ONG), es esencialmente un espacio de cabildeo para la reforma democrática en un Estado neoliberal autoritario. Las feministas de Malasia son sumamente críticas acerca de las prácticas represivas del Estado, pero disponen de muy pocos espacios sociales para el activismo político. Los partidos islámicos ofrecen una alternativa ante el modernismo represivo del Gobierno. Tanto el Gobierno como la oposición islámica advierten lo valioso que es apelar a las mujeres y han empezado a competir entre sí para lograr que éstas participen y ganarse su lealtad. En 2001, el Gobierno estableció un Ministerio de Asuntos de la Mujer, contando con las mujeres activistas del WAC cada vez que era posible, y desde entonces se ha burlado de la oposición islámica porque ésta elude los debates sobre igualdad de género. En la campaña para las elecciones de 2004, la oposición islámica se vengó reclamando el campo feminista y anunciando que lanzaría la candidatura de una mujer en cada estado del país.

## MOVILIZACIÓN TRANSNACIONAL DE LAS MUJERES

La movilización femenina transnacional ha ayudado a sentar las bases de la sociedad civil mundial durante el último siglo. Entre sus logros notables se incluyen la oposición a la guerra, la articulación de un tratado sobre los derechos de la mujer y la politización de la violencia contra las mujeres.<sup>26</sup> Los últimos diez años han sido testigos de un crecimiento sin precedente en el activismo feminista y transnacional de las mujeres. Las numerosas conferencias y reuniones cumbre de la Organización de las Naciones Unidas durante el decenio de 1990 y las rondas de negociaciones internacionales sobre comercio, reglamentación del medio ambiente, crímenes contra la humanidad y varios otros asuntos importantes para las mujeres, galvanizaron la búsqueda de alianzas y permitieron a los movimientos de mujeres llegar a ser cada vez más sofisticados en su interacción con las instituciones mundiales. La difusión de la comunicación a través de Internet ha ayudado a las mujeres a superar las desventajas inherentes a su condición, relacionadas con la movilidad

espacial y la posibilidad de expresar sus opiniones. La capacidad de comunicación y la fuerza institucional mostradas recientemente por la sociedad civil mundial pueden acrecentar el efecto de sus campañas, generando un tipo de repercusión en la política nacional e internacional que rara vez los movimientos de mujeres logran por sí mismos.

Desde luego, no existe un movimiento internacional de mujeres, único y unificado; tampoco hay tal cosa como el feminismo mundial. Existen todo tipo de disparidades profundas entre las asociaciones de mujeres de diferentes regiones y países. No obstante, el intento de forjar alianzas entre ellas ha tenido un efecto importante en el establecimiento de normas y en la formulación de políticas a nivel mundial en contextos tales como derechos reproductivos,<sup>27</sup> violencia contra las mujeres y Derecho penal internacional. Las mujeres en campaña en pro de la justicia económica han estado muy vinculadas con el movimiento social poco integrado de Justicia Global y Solidaridad, el cual se dedica a analizar las implicaciones negativas del libre comercio y la mundialización para los pueblos del mundo en desarrollo, y cuya base desde el año 2001 han sido los Foros Sociales Mundiales anuales.<sup>28</sup> Los grupos de mujeres por la paz estuvieron involucrados de manera muy significativa en la protesta más grande de la historia realizada en un día: las manifestaciones contra la guerra que tuvieron lugar el 15 de febrero de 2003 en 800 ciudades, con la participación de 11 millones de personas. El Caucus de Mujeres para la Justicia de Género hizo una importante aportación a la redacción y adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) en el año 2000, y ayudó a asegurar el nombramiento de siete mujeres jueces (de un total de 18) ante la CPI en marzo de 2003.

La eficacia de la movilización transnacional de las mujeres está condicionada por determinados factores. Todos los grupos de presión de la sociedad civil internacional se enfrentan a problemas semejantes cuando tratan de influir en quienes elaboran y aplican las políticas nacionales y subnacionales, exigiéndoles la adhesión a normas y tratados internacionales. Las campañas transnacionales de las mujeres se han dirigido a los organismos de las Naciones Unidas y a las instituciones financieras internacionales (IFI), con el fin de que tomen más en cuenta las sugerencias sobre políticas provenientes de la sociedad civil a

través de las ONG que la representan. Han aprovechado también sus conferencias y reuniones para promover actividades de manera conjunta y fijar sus posiciones a nivel internacional. Sin embargo, los tratados y resoluciones internacionales no necesariamente se aplican a nivel nacional, sobre todo en los Estados profundamente conservadores y opuestos al programa feminista. Las resoluciones adoptadas en las conferencias internacionales no son obligatorias y rara vez se refieren a problemas estructurales profundos de la sociedad. Si ha de haber cambios a nivel nacional, es necesario que las mujeres entren en acción dentro y fuera del gobierno, para obligar a los Estados a que rindan cuentas sobre sus compromisos internacionales.<sup>29</sup>

Por las ambigüedades que se generan al trabajar en dos niveles, el nacional y el internacional, surge otro problema. La meta de una gran parte de las mujeres y las feministas comprometidas con las instituciones internacionales es mejorar la rendición de cuentas a las ciudadanas por parte de cada uno de los Estados individuales. Por ejemplo, mediante cierto activismo reciente “contra la mundialización” se ha tratado de fortalecer la facultad independiente de los Estados individuales en la formulación de políticas, ante su relación con organismos tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC). ¿Deberían las redes de mujeres considerar a los organismos internacionales como partidarios y ejecutores de su programa, siendo que dichos organismos son actualmente criticados como perpetradores clave de programas que refuerzan la injusticia social en los países de ingresos bajos? Si las mujeres se unen a los esfuerzos para socavar la importancia de estas instituciones, pueden tener aun menos esperanzas de influir en los programas nacionales a favor de la igualdad de oportunidades para la mujer, o de reactivar el apoyo a los movimientos de mujeres a nivel nacional en los Estados antifeministas. Recientemente, el unilateralismo de los Estados Unidos de América ha impulsado a los grupos transnacionales de mujeres a insistir en el fortalecimiento de las instituciones multilaterales, sin las cuales sus propios esfuerzos no hubieran fructificado.

El activismo transnacional de las mujeres está también en conflicto consigo mismo, dada la vasta gama de diferencias entre los movimientos de diferentes partes del mundo. La definición de los problemas, su jerarquización, la fijación de objetivos y

metas, y la selección de estrategias para lograrlos, todo ello puede ser advertido de manera diferente. Algunas separaciones siguen líneas de división clásicas, tales como la que existe entre Norte y Sur; otras están arraigadas en dogmas ideológicos o religiosos y no tienen relación con la geografía en particular; sin embargo, otras son culturalmente específicas. Las alianzas que se establecen entre los movimientos transnacionales de mujeres implican también inevitablemente una falta de coincidencia entre los programas de los diferentes grupos. Por ejemplo, un aliado útil en la campaña internacional para cancelar la deuda (denominada Jubileo 2000), ha sido la Iglesia Católica, cuya jerarquía actual se opone vehementemente a la justicia entre los sexos.<sup>30</sup> La cobertura general proporcionada por los regímenes de derechos y otros conjuntos de normas internacionales y obligaciones derivadas de los tratados, no alcanza invariablemente el éxito al tratar de unir todos los puntos de vista.

### Los derechos humanos como marco unificador de referencia

Con el concepto derechos humanos se apela a una humanidad común y a la igualdad humana, a las normas universales de justicia e imparcialidad, a los conceptos liberales de lo individual y de la comunidad, y a un Estado democrático sensible a las demandas de los ciudadanos. Aunque su aplicación a través de diversas culturas puede ser controvertida, no obstante, el marco de referencia de los derechos humanos ha aportado una cobertura bajo la cual los diversos movimientos de mujeres han laborado juntos durante los últimos 15 años. La formulación específica de los derechos humanos de la mujer ha ayudado también a centrar la igualdad de género y los derechos de la mujer en otros campos de las políticas a nivel mundial, entre ellos desarrollo social, derecho humanitario, población y protección del medio ambiente.

El instrumento principal de los derechos de la mujer a nivel internacional es la Convención de 1979 sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés). Debido a la creciente movilización social de las mujeres, en el decenio de 1990 se aceleró la ratificación

de dicho acuerdo y muchos países que habían manifestado sus reservas las retiraron.<sup>31</sup> La legitimidad de las organizaciones de mujeres como vigilantes de confianza para el cumplimiento de la CEDAW fue reconocida en su Protocolo Facultativo de 1999, por el cual se otorga autoridad al Comité de la CEDAW (formado por 23 expertos independientes encargados de vigilar la actuación de la CEDAW a nivel nacional), a fin de tomar en consideración las quejas planteadas directamente por las mujeres de manera individual o en grupos. Setenta y cinco países han firmado el Protocolo Facultativo, pero falta que muchos de ellos lo ratifiquen plenamente; es demasiado pronto también para ver si con ello mejorará el cumplimiento del Protocolo por parte de los Estados. Las mujeres que han agotado sus opciones de petición o queja bajo la legislación nacional, o han encontrado que “la aplicación de dichos remedios se demora sin razón o no es probable que proporcione ayuda verdadera”, pueden ahora tratar de enmendarlo directamente siguiendo los procedimientos estipulados en el Protocolo Facultativo. Este último implica un reconocimiento de que los sistemas de información del Estado pueden estar afectados por el sesgo masculino institucionalizado que normalmente inhibe la denuncia de los abusos contra los derechos de la mujer y, por lo tanto, debería haber un mecanismo por el cual las mujeres puedan acudir a otras instancias en busca de solución.<sup>32</sup>

### La Corte Penal Internacional

La experiencia de movilización en torno a la CEDAW y sus mecanismos de aplicación tuvo como consecuencia la creación de un órgano de campaña especial de las mujeres en conexión con el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI). El Caucus de Mujeres para la Justicia de Género, establecido en 1997, surgió de la Coalición no gubernamental formada en 1995 en pro de una CPI, y se apoyó en la fuerza y sofisticación obtenida en su activismo internacional previo. El caucus cabildeó a favor del nombramiento de mujeres y expertos en cuestiones de género adscritos a todos los órganos de la Corte, y en pro de que esta última quedara fuera de las estructuras de poder tradicionales.<sup>33</sup> El grupo demandó también que se protegiera

mejor a las víctimas de crímenes, por lo que se promovió la adopción del Artículo 15 del Estatuto de la CPI. Este otorga autoridad al fiscal de dicha Corte para investigar los alegatos de crímenes denunciados no sólo por el Consejo de Seguridad o por Estados individuales, sino también como resultado de información proporcionada por las víctimas, las organizaciones no gubernamentales y “cualquier otra fuente confiable”.<sup>34</sup>

El Caucus de Mujeres exigió también que se incluyera la violencia sexual como crimen contra la humanidad (y como crimen de guerra). Por ello, todos los Estados que reconocen la jurisdicción de la CPI tienen la obligación de colaborar con ésta en la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes, no importa dónde ni por quién hayan sido cometidos: no se puede alegar la soberanía como argumento para ocultar atrocidades locales. Los funcionarios públicos responsables de violencia sexual tendrán que responder ahora ante la sociedad mundial, no sólo ante los ciudadanos de sus propios países. Al insistir en la posición central de la mujer en la sociedad civil mundial y al asegurar que la violencia sexual es un crimen grave, el Caucus de Mujeres estableció un instrumento nuevo para hacer que los Estados rindan mejores cuentas a las mujeres en cuanto a prevención y enjuiciamiento de las violaciones a los derechos humanos que las afectan a ellas predominantemente.

## Posiciones polarizadas sobre trabajo sexual y la trata de personas

Un contexto en el cual el marco común de referencia de los derechos humanos ha sido insuficiente para vincular las posiciones ideológicas divididas es el que se refiere al problema de la trata de mujeres y niñas para comercio sexual. En diciembre del 2000, más de 80 países firmaron el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, promovido por el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito, en Palermo, Italia. Las definiciones de trata de personas y trabajo sexual, y los desacuerdos sobre la naturaleza y escala del problema, fueron objeto de un debate intenso y profundamente polarizado entre conjuntos clave de mujeres, divididos en dos grupos de

presión transnacionales: *International Human Rights Network* y el Caucus de Derechos Humanos. Ambos se atribuyeron la etiqueta de feministas y “defensores de los derechos humanos” como táctica de legitimación; ambos grupos subrayaron también la importancia de su red de relaciones en los países en desarrollo, particularmente en Asia Meridional y en el Sudeste de Asia.

La *International Human Rights Network* tenía como núcleo una ONG internacional con una perspectiva “abolicionista” sobre el trabajo sexual: la CATW (*Coalition Against Trafficking in Women*). Este grupo considera la prostitución como una forma de violencia sexual a la cual las mujeres no se dedicarían si se les diera una opción libre y significativa y, por lo tanto, considera el trabajo sexual como una violación de los derechos humanos; desde este enfoque, quienquiera que ayude a las mujeres a migrar a fin de que se comprometan en el trabajo sexual es un traficante de mujeres.<sup>35</sup> En el campo opuesto se encontraban la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, en sus siglas en inglés) y el *Asian Women’s Human Rights Council* (AWHRC), así como otros grupos de derechos de las trabajadoras sexuales. Su posición fundamental se relacionaba con las perspectivas del movimiento mundial de derechos de la trabajadora sexual, en el cual se reconoce este tipo de trabajo como una forma de empleo escogida por las mujeres y como una expresión de su sexualidad. Desde esta perspectiva, la trata de mujeres sucede si las mujeres son forzadas a migrar para dedicarse al trabajo sexual o son forzadas a ejercerlo; en las políticas oficiales para tratar este problema se debe respetar la facultad de las mujeres para actuar y determinar si han consentido el trabajo sexual y la migración.

Lo que estaba en discusión era la manera de entender la facultad femenina para actuar, la sexualidad, el consentimiento y la repercusión coercitiva de los esfuerzos estatales para “proteger” a las mujeres. Una miembro del grupo de presión de las trabajadoras sexuales señaló que, históricamente, las medidas contra la trata de mujeres han sido aplicadas en contra de las propias trabajadoras sexuales y no en contra de los “traficantes”.<sup>36</sup> Aseguraron que la fuerza o el engaño era una condición necesaria en la definición de la trata de mujeres; consideraron también que “trata” y “prostitución” no deberían estar vinculados en el Protocolo, ya que se trafica ilegalmente con hombres, mujeres

y niños para una gran variedad de servicios, incluida la explotación de mano de obra en talleres clandestinos y en la agricultura. Sin embargo, en última instancia, el protocolo de las Naciones Unidas contra la trata de personas no distinguió entre migración forzada o libre para dedicarse al trabajo sexual, y la víctima no tiene que demostrar que haya sido forzada; en esos casos la violación de los derechos humanos se da por sentada.<sup>37</sup> Las trabajadoras sexuales consideran que esta posición incrementa la ansiedad contemporánea en relación con la inmigración y la petición de asilo, así como con la independencia femenina, cuando el punto de vista socialmente aceptado es que las mujeres deberían estar sujetas a la familia (véase también el capítulo 7).

### Otras instancias donde “los derechos humanos” no se aplican a todos por igual

Problemas similares relacionados con la facultad de la mujer para actuar y con su sexualidad, han dividido a organizaciones y movimientos de mujeres al tratar temas de homosexualidad y abusos contra personas que se identifican como lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales.<sup>38</sup> Los movimientos de los pueblos indígenas han desafiado la base individualista en que se sustenta la idea de derechos humanos del Occidente liberal y la contrastan con las nociones sobre derechos fundamentadas en identidades de grupo, culturas y formas de ser.

Otra preocupación que surge sobre el enfoque de derechos humanos en el feminismo transnacional es que su aplicación depende de los abogados y se centra en el Derecho a nivel nacional y en los tratados internacionales y su aplicación. Las personas que lo critican consideran que el énfasis en la legalidad está mal enfocado<sup>39</sup> y promueve normas de derechos económicos y sociales que en muchos entornos resultan insostenibles. Los enfoques sustentados en los derechos presuponen la existencia de un Estado que funciona y rinde cuentas, en el cual los ciudadanos o los grupos de personas pueden recurrir a la ley. En países donde los ordenamientos jurídicos carecen de recursos suficientes o han sido desacreditados por la corrupción, los Estados pueden ser poco eficaces en la aplicación de su propia legislación

para consignar y castigar a los violadores de los derechos, y menos todavía para cumplir con sus compromisos legales internacionales. Al darse cuenta de esto, los movimientos de mujeres a nivel local han intensificado sus esfuerzos para mejorar la capacidad nacional de reformar y aplicar la legislación relacionada con los derechos de la mujer. Sus propósitos y horizontes se han ampliado, logrando avanzar en el desarrollo de una crítica feminista a las reformas actuales dirigidas hacia la “gestión de buen gobierno”.

### Justicia económica: El nuevo activismo feminista

Los movimientos transnacionales de mujeres han desarrollado su propia respuesta a las repercusiones de las políticas macroeconómicas neoliberales de los años 80 y 90, particularmente en el contexto de la liberalización del comercio. Una crítica feminista coherente contra las políticas de austeridad económica auspiciadas por la ideología del mercado, surgió en la Cumbre Social de las Naciones Unidas de 1994 realizada en Copenhague. En dicha Cumbre, la Alianza Mundial de Mujeres en pro de Alternativas de Desarrollo reunió a las redes regionales de asociaciones de mujeres en un Caucus de Mujeres que propuso enmiendas de largo alcance a la Declaración y al Programa de Acción de la Cumbre. En dichas enmiendas se insistió en la importancia de reglamentar los mercados con la finalidad de reducir las desigualdades, prevenir la inestabilidad y ampliar el empleo; se buscó la fijación de impuestos a las transacciones financieras internacionales especulativas y a otras formas de búsqueda de ganancias políticamente desestabilizadoras o perjudiciales para el medio ambiente; y se exigió que la maquinaria económica multilateral, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la OMC, rindiera cuentas al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, en sus siglas en inglés) y a los organismos encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados sobre derechos humanos.<sup>40</sup> Las subsecuentes críticas feministas al libre comercio han demostrado con acierto el fracaso de este último en la reducción de la pobreza.

El activismo en cuanto al comercio y la inversión es un campo de crecimiento rápido de la movilización transnacional de las mujeres. Algunos grupos de mujeres se concentran en la creación de mecanismos nuevos para negociar las normas laborales y medioambientales con las corporaciones internacionales, y en vigilar su cumplimiento. La actividad más evidente es la que se lleva a cabo en el seno del movimiento “antimundialización”; aquí los grupos de mujeres han adoptado la tarea de criticar el mandato de la OMC y su gestión de gobierno, y de examinar los acuerdos de comercio en el ámbito regional. La *International Gender and Trade Network*, con base en el Sur, concentra su atención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en sus siglas en inglés), la OMC y el Área de Libre Comercio de las Américas, así como en el Acuerdo de Cotonou para África, el Caribe y el Pacífico. El Grupo Informal de Trabajo sobre Género y Comercio, con base en Europa, se está convirtiendo en un Caucus de Mujeres con carácter permanente en la OMC, en donde aplica su Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales como un punto de partida a través del cual desarrollar evaluaciones sensibles en cuestiones de género, sobre las repercusiones de las políticas comerciales. La Coalición Internacional de Mujeres por la Justicia Económica (WICEJ, en sus siglas en inglés) trata de influir en la elaboración de políticas macroeconómicas a través de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas.

Una preocupación importante del activismo transnacional de las mujeres en materia de comercio es la forma como el crecimiento económico promovido por las exportaciones puede basarse en la fuerza laboral femenina barata, y la forma como la competencia feroz que implica el libre comercio puede provocar una “carrera hacia el abismo” en cuanto a las normas laborales (véase el capítulo 3). Las tácticas para contrarrestar esto, así como para frenar las exenciones inequitativas que los países ricos hábilmente logran negociar a través de la OMC, han incluido presionar a este organismo para que apoye el desarrollo sustentable mediante la aplicación de “estipulaciones de trato especial y diferenciado” que ya existen para promover la reducción de la pobreza y lograr la equidad entre el hombre y la mujer en los países pobres.

Tal como ocurre en el movimiento antimundialización más amplio, a veces surgen corrientes contradictorias en el seno de los movimientos de mujeres en pro de la justicia económica. La utilización de la fuerza laboral femenina barata en los países del Sur reduce el empleo de las mujeres en los países del Norte; por ello, los intereses económicos de las mujeres meridionales y septentrionales tienden a estar en conflicto (división que se refleja en los movimientos activistas internacionales). Las campañas para reforzar las normas laborales y medioambientales pueden dar como resultado que las mujeres del Sur queden sin trabajo, o empujarlas hacia empleo o negocios informales que son imposibles de reglamentar. La preocupación por las consecuencias que pueda tener para el medio ambiente el crecimiento agresivo generado por el comercio se contrapone a la preocupación de que, al proteger el medio ambiente, se les niegue a los países pobres la capacidad de exportar sus productos agrícolas y de desarrollar su industria como los países ricos ya lo han hecho. Estos conflictos de intereses económicos constituyen un desafío para quienes tratan de establecer coaliciones. Los grupos transnacionales de mujeres a favor de la justicia económica continúan debatiendo si sus miembros deberían contar con un programa común y crítico, o si ellas deberían actuar simplemente como redes de solidaridad para apoyar a las miembros que pertenecen a los países del Sur.

## Notes

- 1 Weldon 2002:97.
- 2 Randall 1987.
- 3 Molyneux 2001:3.
- 4 Beckwith 2004:4.
- 5 Beckwith 2001:372; Weldon 2004:3.
- 6 Baldez 2002:14.
- 7 Molyneux 2001:145.
- 8 Molyneux 2001:146.
- 9 Molyneux 2001:146-52.
- 10 Huntington 1991.
- 11 Goven 1993, citado en Fodor, E. 2004a.
- 12 Einhorn 1993.
- 13 Adamik 1993; Einhorn 1993.
- 14 Fodor 2004:14, refiriéndose a Graf 2003.
- 15 Brand 1998; Salame 1994; Lazreg 2004:6.
- 16 Lazreg 2004.
- 17 Dobrowsky y Hart 2003.
- 18 Tripp 2000:195.
- 19 Mikell 2003:14.
- 20 Jaffrelot 1996.
- 21 Menon 2000; Basu 2004.
- 22 Basu 1995.
- 23 Bouvier 2004:19.
- 24 Paidar 2002.
- 25 Lazreg 2004:27.
- 26 Rupp 1997; Boulding 1993.
- 27 Petchesky 2003.
- 28 Said y Desai 2003.
- 29 Silliman 1999:152, citado en Petchesky 2000:28.
- 30 Sen 2004:4.
- 31 Ackerly y D'Costa 2004:3.
- 32 CEDAW 1999, Artículo 4.
- 33 Spees 2003:1.
- 34 Prakash 2002:4115.
- 35 Doezema 2004:capítulo 1.
- 36 Doezema 2004.
- 37 Sen 2003:140.
- 38 Ackerly y D'Costa 2004:15-18.
- 39 Sen 2003:145.
- 40 Petchesky 2000:28.